



Aunque parezca estar de moda, es importante que los políticos dejen de lanzarse acusaciones de delitos para los que no hay pruebas. Dañan al país.

Narco y política

"Calumnia, que algo queda".

Popular

S e ha puesto de moda acusar a los rivales políticos de estar involucrados con el narco. Es ya una descalificación automática, como llamar "fascista" o "comunista" a quien piensa diferente; pero, cuidado, porque las palabras tienen consecuencias.

Estas acusaciones se emiten con ligereza. En la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal) Porfirio Muñoz Ledo, antes aliado de López Obrador, declaró: "Hay un paquete de poder y ese paquete de poder es una alianza entre el narco y el gobierno". Le advirtió al mandatario: "Entienda que su contubernio con el narco no es heredable porque estos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas las plazas políticas, se entienden con el que va a llegar. Ya no va a necesitar el narco del Presidente".

En una entrevista con Carmen Aristegui el exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida declaró que hay "indicios que apuntan a una protección que es muy sospechosa del gobierno [federal] sobre el narcotráfico sobre el cártel de Sinaloa". El también exsecretario de Gobernación se refirió a los viajes del Presidente a las zonas de producción de droga de Sinaloa y a la ocasión en que le dio la mano a la madre de El Chapo Guzmán. El mis-

mo Labastida, sin embargo, reconoció: "Ahí detrás pueden estar cosas muy sospechosas, pero no tengo la evidencia suficiente".

Las acusaciones sin pruebas surgen también del otro bando. Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, mandó un mensaje en Twitter el 4 de junio en el que decía: "Todos los cárteles del narco que actúan hasta nuestros días fueron fundados en el gobierno de Felipe Calderón: La familia michoacana se fundó en el 2006, CJNG se fundó en el 2007, Cártel de los Beltrán Leyva se fundó en el 2008, Guerreros unidos se fundó en el 2011, Los templarios se fundó en el 2011, Calderón gobernó de 2006 a 2012".

El Presidente cometió un error político al saludar a la madre de El Chapo y también al promover la estrategia de seguridad como de "Abrazos y no balazos", pero realmente no hay señales de que el gobierno federal o el Presidente estén hoy, o havan estado en el pasado, en contubernio con el crimen organizado. Sí hay señales, en cambio, de la infiltración de grupos del crimen organizado en gobiernos locales. Esto se evidenció, por ejemplo, con la colaboración de la policía municipal de Iguala en 2014 en el secuestro de los normalistas de Avotzinapa, que fueron entregados a miembros de Guerreros Unidos. El expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, están en

la cárcel por presuntos vínculos con esa organización. En distintas elecciones se han generado también indicaciones de la participación de grupos criminales para favorecer a algunos candidatos a alcaldías y quizá a gobiernos estatales. No existen esos indicios, sin embargo, en el gobierno federal, ni hoy ni en tiempos de Calderón.

Las acusaciones dejan siempre alguna mancha. El senador estadounidense Marco Rubio las ha repetido y ha señalado supuestos vínculos del narco con el presidente López Obrador. Ayer el primer mandatario mexicano respondió: "Que presenten pruebas los senadores de Estados Unidos Ted Cruz y Marco Rubio de que yo protejo a narcotraficantes". No las presentarán, porque no las hay, pero eso no importa: el Presidente se está comprando un pleito que daña a México ya que estos senadores tienen gran influencia en Estados Unidos.

Es importante que en México los políticos de uno u otro lado dejen de lanzarse acusaciones de delitos para los que no hay pruebas. Al final, solo le hacen daño al país.

¿EMPRESARIO?

Alejandro Moreno, Alito, compró 39 mil metros cuadrados de terreno cuando era gobernador de Campeche a cuatro pesos el metro. El precio se ha multiplicado por 500, según una investigación de MCCI. Quizá sea mejor empresario que dirigente de partido.